

## **2. METODOLOGÍA**

La metodología del presente estudio combina desde elementos de la teoría de la argumentación, la teoría general del derecho penal y del derecho procesal, la del derecho constitucional, hasta elementos de análisis económico del derecho penal y civil aplicado a la discriminación “de género” en el incumplimiento de las normas internacionales en materia de protección de los derechos de las mujeres.

Además, el objetivo adicional de quienes desarrollaron dicha metodología es que los resultados de su aplicación permitan a la sociedad civil contar con las herramientas para desarrollar un diagnóstico completo del desempeño de las instituciones de procuración e impartición de justicia, promover las mejores prácticas identificadas con el fin de apoyar a los gobiernos y generar los mecanismos que a corto, mediano y largo plazo ayuden a aumentar los niveles de cumplimiento real de las normas internacional de protección de derechos de las mujeres.

Por ello hemos puesto especial cuidado en que al aplicar la metodología se vayan adicionando nuevos elementos que permitan mejorar este estudio y que fueron propuestos por los principales actores del sistema de justicia: usuarias/os, abogadas/os litigantes, funcionarias/os, pero también por las/los integrantes de los equipos locales lo que permitió dar el enfoque de género a todos y cada uno de los instrumentos diseñados.

### **2.1. Análisis sistémico<sup>1</sup>**

El pensamiento sistémico establece que las propiedades esenciales de un organismo o sistema viviente, son propiedades del todo que ninguna de las partes posee. Emergen de las interacciones y relaciones entre las partes. Éstas propiedades son destruidas cuando el sistema es diseccionado, ya sea física o teóricamente, en elementos aislados. Las partes del sistema no están aisladas y la naturaleza del conjunto es siempre distinta de la mera suma de sus partes.

Las propiedades de las partes no son intrínsecas, sino que sólo pueden ser comprendidas en el contexto de un conjunto mayor. En el planteamiento sistémico, las propiedades de las partes sólo se pueden comprender desde la organización del conjunto, por lo tanto, el pensamiento sistémico no se concentra en los componentes básicos, sino en los principios esenciales de organización. El pensamiento sistémico, entonces, es contextual, en contrapartida al analítico.

Pensar en sistemas es pensar en contextos. El pensamiento sistémico tiene características esenciales. El primer y más general criterio es el cambio de las partes al

---

<sup>1</sup> Esta es una aportación de Ernesto Mendieta Jiménez y puede verse completa en el capítulo 2 de la obra “El sistema de Justicia Penal y su Reforma. Teoría y Práctica”, Ed. Fontamara, México 2006, en el que expone los elementos fundamentales de la Teoría General de sistemas de Berthelamfy.

todo, ya que las propiedades esenciales o sistémicas son propiedades del conjunto que ninguna de las partes tiene por sí sola, emergen de las relaciones organizadoras de las partes. Las propiedades sistémicas no subsisten cuando el sistema se disecciona en elementos aislados.

Otro criterio del pensamiento sistémico es la habilidad para focalizar la atención alternativamente en distintos niveles sistémicos. Esto permite obtener importantes percepciones, considerando que cada nivel posee propiedades que no se dan a niveles inferiores.

Por ello este estudio incluye la identificación de las partes que intervienen el sistema de justicia, las relaciones que existen entre unos y otros, identificando las características que les hacen aportar efectividad al sistema. Es importante destacar que las mejoras del procedimiento en materia de justicia que serán analizadas y discutidas en el presente trabajo dependen de que el análisis se realice tomando en cuenta todos los elementos que lo integran, ya que si éste se aboca sólo a una parte, se corre el riesgo de que no se logre mejorar el procedimiento y que no se obtengan beneficios para el sistema en su conjunto.

## 2.2. Visión semiótica del derecho<sup>2</sup>

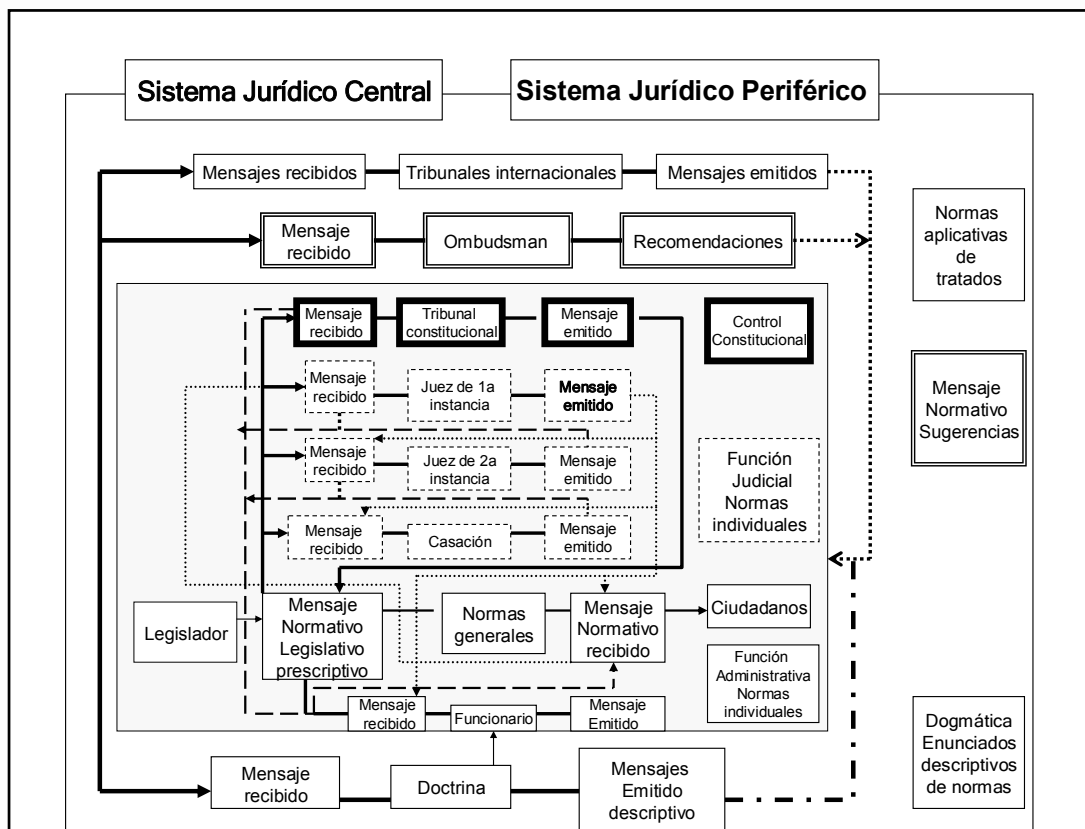
Un postulado básico de la aplicación de los modelos semióticos en el derecho es que todo en el derecho puede ser analizado en elementos estáticos y en procesos dinámicos. Así, el modelo clásico de comunicación del derecho parte del legislador al ciudadano, pasando por el juez que según las teorías más básicas sólo es la boca de la ley y, según otras, es un actor fundamental.

En realidad el proceso de la comunicación del derecho puede ser definido como una serie de transformaciones a varios niveles en los que se van realizando cambios de mensajes en varios planos. Se trata de codificar y decodificar información, y por esto es posible analizar sus elementos a través de una teoría de relaciones metalingüísticas entre lenguajes objeto y metalenguajes. Algunos metalenguajes son capaces de modificar a otros y otros no lo son.

El derecho puede ser analizado también de manera transversal en procesos de análisis estáticos, como la creación de una norma individual por un juez o funcionario administrativo o, también de manera estática en el proceso de creación de normas generales, por ejemplo en el proceso legislativo. Es posible analizarlo y fijarlo a partir de diferentes puntos de vista, todos ellos estáticos. Los puntos de vista dinámicos ven al derecho como un proceso continuo de intercambio de mensajes comunicativos ante distintas personas y con distintos elementos de control.

---

<sup>2</sup> Esta teoría fue desarrollada en el libro “Código Semiótico y Teorías del Derecho”. Editorial Fontamara. México, 2004. y en el capítulo tercero de la obra “El Sistema de Justicia Penal...”. Aquí se hace la aplicación de la misma al derecho del penal.



Con base en los anteriores comentarios haremos un estudio sobre el proceso implícito en la justicia en las Entidades Federativas que forman parte del presente estudio. Observando centralmente que el proceso jurídico requiere de elementos resolutivos jurisdiccionales que tengan la característica de congruencia, consistencia y predictibilidad que será utilizada para el análisis de expedientes, del cual hablaremos más adelante.

### 2.2.1. Teoría General de la Decisión Jurídica Aplicada a las Actuaciones de las autoridades administrativas y judiciales que intervienen en el Sistema de Justicia.

Todo sistema jurídico implica diversos modelos para tomar decisiones, por lo cual, desarrollaremos diferentes aspectos en los que se basan los códigos semióticos de la comunicación y el intercambio de información entre los diferentes sistemas jurídicos, que son los que toma en cuenta cada decisor jurídico. Es, en consecuencia, una teoría sobre el control de decisiones de los magistrados, jueces y otro personal de los tribunales y juzgados y, al final también, de todo operador jurídico. Al mismo tiempo permitirá desarrollar una plataforma de análisis para ser aplicada a las decisiones del Juzgado. En este orden de ideas, podemos decir que el sistema jurídico presupone un proceso de decisiones y controles entre autoridades, a través de la asignación de decisiones y valores que son controladas dinámicamente en diversos procesos.

¿Cómo se determina el funcionamiento de un sistema?, ¿con cuántos procesos de control?, ¿qué revisar?, ¿cómo hacerlo? y ¿dónde se detiene el proceso recursivo?; las respuestas a las anteriores interrogantes es lo que determina el proceso de construcción de un sistema judicial. Por tanto, la teoría general de la decisión es, pues, indispensable en la teoría de los sistemas judiciales y su reforma.

Los elementos transversales y comunes a las decisiones que toman todos los órganos de la justicia en los países del mundo y que fundan esta teoría, están basados en análisis comparados en el derecho y en los sistemas judiciales. La utilidad de estos cortes transversales es que permite, no solamente evaluar los sistemas sino incluso realizar propuestas de reformas tratando de lograr el equilibrio; se trata de verificar el nivel de argumentación requerido y las constricciones internas de las normas, la determinación de un control formal de la argumentación señalando los requisitos para poder operarlo y por último un procedimiento que controle este ejercicio basado en el sistema de pesos y contrapesos (*check and balances*), que funciona como un control externo respecto de las decisiones tomadas. Es este último un proceso dinámico de control que determina al final el mensaje normativo dentro de una teoría semiótica del derecho, el que considera al derecho como un proceso de elementos estáticos y dinámicos.

Nuestra teoría considera que hay cuatro elementos que por presencia o por ausencia funcionan en toda decisión jurídica o judicial, a saber:

- a) Estándar de argumentación.
- b) Elementos de constricción internas.
- c) Elementos de constricción formales.
- d) Controles externos.

Los estándares de argumentación se refieren a criterios de razonabilidad o maneras en la que se pesan los argumentos. Mientras que los elementos de constricción internas, o requisitos materiales para determinar la decisión, son los que fijan las condiciones para dictar una sentencia. Los elementos de constricción formales se refieren a los medios físicos y a los requisitos formales necesarios para su autorización. Éstos se refieren al cómo se solicita o se otorga una decisión o una sentencia.

Los controles externos de la decisión se refieren a la pregunta ¿quién controla al que decide? Ellos establecerán, por ejemplo, quién puede solicitar, quién puede autorizar, quién puede controlar la revisión en una segunda instancia. Los controles externos pueden desarrollarse *ex ante* o *ex post* de la decisión. Son controles *ex ante* aquellos que requieren de una decisión o autorización de otra autoridad independiente antes del inicio de una acción. Son controles *ex post* aquellos que autorizan la medida, aunque ésta quede sujeta a una fiscalización posterior por parte de una autoridad independiente.

Subrayamos el hecho de que esta teoría del control tiene siempre presente los elementos internos de aquel que decide y tiene como perspectiva un punto de vista interno y el resultado de esta decisión que puede ser analizada desde un punto de vista



externo. Toda norma es siempre un esquema de interpretación que tiene ambas perspectivas. De hecho, los que hacen teoría a partir de la práctica, como jueces, tienen ambos puntos de vista en sus análisis, mientras que los teóricos frecuentemente parten de la perspectiva exterior.

### **2.3. Análisis Socioeconómico del Derecho<sup>3</sup>**

Es necesario identificar aquellos canales por los cuales los sistemas legales y judiciales afectan el desarrollo económico, en este caso, a la generación de empleo estable sujeto a reglas coherentes, consistentes, y predecibles en el interactuar entre la autoridad y las mujeres. Este es el ámbito metodológico del análisis económico del derecho que representa un esfuerzo interdisciplinario que se aboca a la identificación de aquellos cambios normativos (procesales y sustantivos), regulatorios y judiciales que, dentro de la tradición jurídica de cada país, tengan la capacidad de fomentar el desarrollo económico. Es por ello que el análisis económico del derecho utiliza metodologías de investigación que concentran su atención en el impacto que el marco jurídico (entendido como sistema de premios y castigos) posee en el comportamiento individual, organizacional y colectivo.

Los sistemas de administración de justicia requieren, para su efectivo funcionamiento, que sus partes integrantes y las decisiones de los sujetos procedan dentro de un marco en donde los procesos de interacción se vean beneficiados por una común comprensión y aceptación de las reglas sustantivas y procesales básicas que rigen al mismo sistema. Este factor consensual requiere un supuesto básico de legitimidad de los mecanismos por los cuales éstas reglas sustantivas y procesales son generadas.

Dentro de la concepción metodológica del análisis económico del derecho, las políticas públicas deben focalizarse en un mejoramiento de la definición y de la aplicación del derecho procesal y sustantivo, para así promover menor incertidumbre entre aquellos actores sociales.

Por otro lado, si los sistemas legales y judiciales se adaptan a la modernización de las economías, entonces se obtendrá una mayor cooperación social con menor incertidumbre y los recursos económicos privados y públicos se asignarán con mayor eficiencia como resultado de ello. En este sentido, la generación de mayores mercados internos accesibles a los sectores económicamente más marginados requiere de sistemas judiciales y legales que funcionen de manera predecible, coherente y consistente, para así disminuir los costos sociales de la interacción económica. Por esto, la falta de acceso, debido a los altos costos que enfrentan las y los ciudadanos, a los sistemas de justicia para así proteger su persona física y propiedad ocasionan una disminución de la inversión futura que destruye la generación de empleo, de recursos humanos y de capital y, por ende, destruyen la capacidad creativa de las personas de menores recursos con menor capacidad de protegerse.

---

<sup>3</sup> El desarrollo completo de este punto puede verse en el capítulo tercero de “El Sistema de Justicia Penal y su Reforma. Teoría y Práctica” y fue redactado por el Prof. Dr. Edgardo Buscaglia.

Herramienta indispensable para el análisis económico del derecho es la jurimetría, entendida como la medición de los diferentes aspectos del funcionamiento de los sistemas de administración de justicia, se aboca a identificar el nivel de sostenibilidad (o falta de ella) de un sistema. Por ejemplo, tiempos procesales que fallan en cumplir los plazos procesales establecidos en los códigos formales y que, como resultado, excluyen del acceso a la justicia a los usuarios de un sistema, representan así una posible medida para evitar un colapso institucional que obedece a causas subyacentes que pueden ir más allá de la simple falta de recursos económicos y que muchas veces obedecen a la falta de legitimidad percibida en aquellas reglas que rigen el sistema de justicia.

Es así como variables de insumo institucional (tales como el número de personal, la utilización de tecnología de punta, partidas de presupuesto ordinario, controles de manejo administrativo, o cargas de trabajo, entre otras) o variables que miden la independencia judicial (tales como un efectivo control de responsabilidades y obstáculos a los procedimientos) o variables de accesibilidad (tales como número de juzgados penales en áreas geográficas distantes, número de defensores públicos, difusión y claridad de las leyes) pueden lograr identificar focos causales de inoperancia.

Para alcanzar los fines antes descritos se obtuvieron indicadores a través de las percepciones de los usuarios no letrados, abogados litigantes y funcionarios de los juzgados; análisis cualitativo de los expedientes y el análisis de datos cuantitativos.

#### **2.4. Instrumentos para la medición y obtención de muestras**

Se diseñaron instrumentos de análisis, tales como cuestionarios, encuestas y matrices, que nos permitieron obtener y analizar las percepciones de las/los usuarias/os no letradas/os, abogadas/os litigantes y funcionarias/os de los juzgados y del Ministerio Público a partir de los cuales se generaron diversos indicadores para conocer, desde el punto de vista de dichas/os actoras/es la calificación del juzgado y del Ministerio Público respecto de aspectos como discriminación de género, capacitación; conocimientos; calidad de las resoluciones; abusos de discrecionalidad procesal; abusos de discrecionalidad normativa; corrupción; confianza en las resoluciones y en el personal; meritocracia y sistema de ascensos; tiempos procesales; imparcialidad; recursos humanos y materiales; independencia; calidad del servicio; rendición de cuentas; confianza, así como transparencia procesal.

La escala de valoración para cada uno de los rubros anteriores, se estableció de 1 a 7, en donde “1” representa la peor percepción y “7” la mejor, por lo que todos aquellos aspectos que hayan sido evaluados con calificaciones menores a 4 significa que existen problemas en el rubro de que se trate, y todo aquello evaluado por encima de 4, deberá ser considerado, como una calificación del rubro de que se trate, de mediana a excelente. Una calificación de 4 significa que la o el encuestado no percibe aspectos ni negativos ni positivos ligados al rubro de que se trate.

Por otra parte, para las preguntas abiertas o semi-abiertas, es preciso codificar y clasificar las posibles respuestas. En la adopción, revisión o, si es necesario, reformulación de las clasificaciones, la perspectiva de género debe estar presente. Entre las opciones de respuesta, las diferencias que se den en función de género deben estar claramente señaladas.

La elaboración del muestreo se basa en los resultados de los censos de población correspondiente a cada una de las Entidades Federativas. Sólo teniendo un buen marco de muestreo se puede garantizar la obtención de una muestra estratificada recogida de manera aleatoria que permita hacer mediciones representativas y confiables de los problemas críticos de género. Los estratos obligatorios en la encuesta son: sexo, edades de la población, nivel de educación, niveles socio-económicos imperantes en cada entidad, así como otras características personales, es decir que no se deberá aplicar una formula general de muestreo para todas las Entidades Federativas. Es evidente, que en cada Entidad, la naturaleza y diseño de la muestra tendrá sus particularidades a los cuales intentaremos atender caso por caso. Por tanto, cada coordinador/a local ha tenido la libertad de proponer estratos adicionales de la muestra, para que se atienda a las diferencias socioeconómicas, victimológicas, etc. que existen entre las diferentes regiones de nuestro país.

En algunos países que carecen de recursos o enfrentan otras limitaciones en el sistema estadístico nacional que describe a la población (para los que no se dedican a este tema estadístico, se les recuerda que del tamaño de cada estrato de la población se deriva una muestra representativa de cada estrato), la información se obtiene utilizando un muestreo probabilístico ante la imposibilidad de delinear un marco de muestreo estratificado aleatorio. Cuando no se pueden utilizar ni los registros nacionales, ni los resultados de los censos de población en cada entidad para así derivar una muestra representativa, entonces la enumeración se llevará a cabo sobre la base de las áreas geográficas o zonificaciones urbanas y rurales.

En este caso, todas las unidades geográficas deben ser identificadas por la/el encuestador/a. En esos casos el diseño de muestreo se construirá en dos etapas:

En la primera, se divide el territorio de cada entidad federativa en áreas geográficas que se enumeran y sobre éstas áreas se realiza una selección inicial basada en criterios sociales, económicos, (rural vs. urbano); conflictividad social (índices delictivos de violencia en general), acceso geográfico a instituciones judiciales.

En la segunda etapa, se realiza una selección representativa del número de juzgados y agencias del ministerio público que luego más tarde representen el flujo anual de causas penales y civiles en los diferentes tipos de causas para luego efectuar la selección aleatoria de las/los usuarias/os que se van a entrevistar en cada juzgado/agencia del ministerio público aplicando la encuesta.

En el diseño del muestreo hay que prestar una atención especial a los factores que afectan las actividades de mujeres, tales como diferencias geográficas donde las

disparidades en materia de género pueden, igualmente, ser examinadas según la estratificación geográfica.

Dado que mujeres y hombres pueden llegar a trabajar en distintos tipos de actividades focalizadas en concentrados espacios geográficos o sectores específicos de la economía, en consecuencia, en ocasiones el diseño de la muestra debe garantizar la cobertura de determinadas áreas, con el fin de asegurar la inclusión del mayor número de mujeres, requisito indispensable de un muestreo adecuado.

Una prueba preliminar de los instrumentos y procedimientos puede ser decisiva para evaluar su validez. Además de verificar el cuestionario- encuesta, la prueba sirve para entrenar al personal en las labores del levantamiento de la información en el campo, corregir las instrucciones previas y prever las necesidades de capacitación. Igualmente, con ello se somete la logística a un sondeo para determinar si la organización opera adecuadamente en todas sus instancias o si es necesario hacer cambios.

Entre la prueba preliminar piloto y la encuesta real debe transcurrir un lapso razonable que permita analizar los resultados obtenidos en las tabulaciones derivadas de la prueba piloto, evaluar los aspectos cooperativos y detectar los posibles problemas y errores de los encuestadores y/o del instrumento mismo para buscar una solución adecuada.

En cuanto a las estadísticas con perspectiva de género, el sondeo cobra especial importancia ahí donde los factores de género, sociales, económicos, y culturales pueden afectar la naturaleza (sesgos o ausencia) de las respuestas. Las discrepancias que a menudo se presentan entre la teoría y la realidad, pueden ser identificadas por las/los encuestadoras/es en la práctica.

Entre el levantamiento de los datos en el terreno, y el análisis de los datos existen varias tareas trascendentales que van desde la captura y procesamiento hasta la medición con las variables comunes

Para evaluar la calidad de toda la información recopilada, es indispensable medir los porcentajes de no-respuesta total y de no-respuesta parcial.

La primera puede deberse a la negativa a dar la información, la inaccesibilidad geográfica (por accidentes topográficos, ausencia de infraestructura de caminos, inundaciones, etc.), la ausencia de personas en el momento del censo. Los motivos deben registrarse cuidadosamente porque cada caso tiene un significado distinto en la evaluación de los resultados. La segunda en cambio, no-respuesta parcial, puede explicarse por la ausencia de un informante adecuado (la persona entrevistada sólo conoce parte de la información que se solicita) o por el ocultamiento voluntario de la información.



La validación del procesamiento de los datos y la revisión de su congruencia son fases importantes en una encuesta. Los procedimientos para imputar los valores faltantes sólo se deben aplicar cuando sea estrictamente indispensable y deben basarse en criterios cuantitativos y cualitativos. Hay además que prestar una atención especial para evitar imputaciones o cambios erróneos derivados de estereotipos en materia de género.

Las unidades "sin repuesta" y aquellas que sí respondieron pueden diferir sistemáticamente entre ellas. Por lo tanto, es pertinente verificar si las características clasificadas por género son similares para unas y otras.

Es fundamental evitar que los grandes esfuerzos realizados para utilizar clasificaciones adecuadas que contemplen las diferencias de género y para codificar la información con sumo cuidado se vean neutralizadas posteriormente. En efecto es preciso garantizar que al momento de compilar la información para elaborar los cuadros, no se conformen grupos que oculten las diferencias importantes sobre género.

La presentación de los datos en grupos detallados enriquece el valor de la información. Los sistemas generales y los más específicos no son incompatibles. En efecto, para mantener una homogeneidad y para que los datos puedan ser comparables a nivel internacional y nacional (series históricas) se pueden construir grandes divisiones, mientras que contemporáneamente para análisis más minuciosos o específicos (por ejemplo con perspectiva de género), es posible definir categorías más detalladas.

La selección de indicadores y medidas de distribución estadística es decisiva para la interpretación correcta de los datos. Igualmente, si la información se presenta en un formato sencillo y los indicadores se explican adecuadamente, las estadísticas podrán llegar a un mayor número de personas.

Es de central importancia que cada cuadro y cada gráfico suministre al/ a la usuaria/o una información específica. Visto que el mensaje varía en función del modo en que se exhiben los datos, hay que evitar que información esencial no pueda percibirse a causa de una presentación poco explícita.

Los cuadros y gráficos no deben estar sobrecargados de información. Todas las columnas y renglones están claramente descritos y acompañados de las correspondientes notas explicativas. El grado de divulgación y utilización de la información estará directamente relacionado con la claridad de la presentación de los datos.

Para que la/el usuaria/o de los datos tenga más libertad en el análisis, es conveniente expresar todos los valores en cifras absolutas. Sin embargo en ocasiones es necesario presentar porcentajes. En estos casos hay que indicar el universo respecto al cual se efectuó el cálculo (cuál es el 100%). Se puede mostrar la composición por sexo de una categoría dada o expresar el porcentaje de mujeres con determinada característica con relación al total de mujeres y el porcentaje de los hombres con determinada característica con relación al total de hombres. En la presentación de las estadísticas

sobre género, los dos tipos de información pueden resultar útiles para proyectar un panorama completo de la situación. Es importante decidir cuál es la presentación más apropiada e incluir los comentarios técnicos indispensables para la comprensión del cuadro y para la realización de un análisis correcto.

**Análisis de Expedientes:** Para el análisis de expedientes se desarrolló una matriz que auxilió a los grupos (equipos locales en cada entidad federativa) que apoyaron durante este proyecto en el proceso de la revisión de las actuaciones del Ministerio Público, de juzgados y salas, en el que se incluyó, no sólo la revisión del debido cumplimiento de la ley sustantiva y procesal, sino de la aplicación de la jurisprudencia, los criterios internacionales, así como los elementos relacionados con la protección de los derechos de las mujeres.

La selección de la muestra está basada en los datos estadísticos proporcionados por las autoridades locales a partir de la solicitud que se hace por parte de los equipos. La solicitud de la información estadística incluyó los siguientes elementos, sin embargo no toda la información fue proporcionada.

El primer elemento estadístico es el número de los juzgados penales y civiles/familiares que funcionan en la Entidad Federativa lo que permite identificar el universo respecto a la institución. El segundo elemento estadístico es el número de sentencias definitivas, es decir aquellas que causaron ejecutoria, dictadas en un año calendario por los delitos: homicidio (doloso), violación, incumplimiento de deberes alimentarios (incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar), violencia familiar y abuso sexual o estupro dependiendo del índice delictivo. Cabe agregar que el número de sentencias debe referirse a cada juzgado para así determinar los juzgados que tiene mayor número de asunto resueltos en un año calendario.

La solicitud de la estadística en materia civil/familiar es muy similar y se refiere de igual forma al número de juzgados familiares y mixtos, así como el número de sentencias dictadas sobre el divorcio necesario por causal de violencia familiar y/o sevicias y malos tratos así como por pensión alimentaria.

Para garantizar la representatividad de los resultados del estudio, la muestra deberá de contemplar los expedientes seleccionados que se calcula con base en el 95% del índice de confiabilidad basado en la información estadística proporcionada<sup>4</sup>.

Adicionalmente, para determinar el funcionamiento real de los juzgados, solicitamos la estadística anual (en la mayoría de los casos se refería al año 2007) respecto a todas las actividades dentro del sistema, así como fuera del mismo. Lo anterior incluyó:

---

<sup>4</sup> Debido a que la información estadística proporcionada por las autoridades a veces reflejaba el número de causas radicadas en lugar de sentencias, se tuvo que tomar este dato como el universo total y calcular la muestra con base en el 90% de confiabilidad, lo que en ningún momento perjudicó a los resultados del estudio.

1. Causas radicadas
2. Causas en movimiento
3. Sentencias (con su sentido)
4. Apelaciones promovidas contra las sentencias (con su sentido)
5. Amparos indirectos (con su sentido)
6. Amparos directos (con su sentido)
7. Autos de libertad
8. Perdón
9. Suspensión de procedimientos
10. Convenios conciliatorios
11. Incompetencias
12. Consignaciones negadas
13. Consignaciones devueltas
14. Ordenes de aprehensión libradas